



Contribución del Partido Comunista de Venezuela (PCV) al 23 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. Izmir-Turquía, 19-22 de octubre de 2023

Estimados camaradas, ante todo, queremos transmitirles el saludo fraterno y solidario del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), a todas las delegaciones de los Partidos Comunistas y Obreros presente en esta importante reunión, y muy particularmente, saludar y agradecer a los camaradas del Partido Comunista de Turquía por el extraordinario trabajo realizado para recibir el 23 EIPCO y garantizar su desarrollo exitoso.

Como seguro conocen, nuestro Partido fue finalmente judicializado y su Comité Central, electo por el XVI Congreso Nacional (3/5 de Noviembre-2022), ilegalizado a través de una espuria sentencia judicial. Resulta alarmante, que el ejecutor de este asalto no fue un gobierno dirigido por los viejos partidos socialdemócratas o de extrema-derecha, sino un gobierno del denominado “progresismo”.

Esta exacerbación del anticomunismo en Venezuela, y el auge de la persecución estatal contra el movimiento obrero, está estrechamente relacionado con la ofensiva internacional del capital contra los derechos de la clase trabajadora, en el contexto de la actual crisis mundial del modo de producción capitalista.

Crisis capitalista y agresividad imperialista

La intensidad de esta crisis es lo que explica la creciente agudización de las contradicciones inter-imperialistas e inter-capitalistas. En definitiva, la guerra, el armamentismo, las sanciones, las tensiones fronterizas y los conflictos bélicos de diferente escala, son la manifestación más violenta de la competencia entre las naciones capitalistas por el control de mercados, rutas comerciales y materias primas. La agresividad imperialista está además marcada por la resistencia que ejercen potencias tradicionales como Estados Unidos, la Unión Europea, y su brazo armado como la OTAN, a la pérdida de hegemonía en la economía mundial.

La situación mundial se torna más peligrosa y las amenazas de conflictos bélicos de gran envergadura son una posibilidad latente. De igual forma, la crisis ha llevado al resurgimiento y fortalecimiento de fuerzas de carácter ultra nacionalistas, racistas y xenófobas, que fomentan el odio nacional, y sirven a las estrategias de conciliación de clases de los gobiernos capitalistas en el marco de su competencia con otras naciones.

En lo político, estos fuertes choques de intereses facilitan los procesos de agrupamientos de países capitalistas emergentes que presionan por cambios en las reglas que rigen las relaciones políticas y comerciales surgidas de la posguerra. Los llamados BRICS, y otras formas de alianzas internacionales, reflejan las disputas de intereses económicos entre polos capitalistas, que nada tienen que ver con el fin del imperialismo o el surgimiento de un nuevo orden mundial más justo y democrático para los pueblos.

No podemos perder de vista, las estrechas relaciones de interdependencia que unen a los países capitalistas en el mercado mundial, y que aún con toda las formas violentas que pueda tomar la competencia, al final se imponen la identidad de intereses que les unen. En este sentido, lo que subyace a la apariencia del choque entre supuestos polos “antagónicos” del mundo “multipolar”, es la lucha de las expresiones nacionales del capital mundial por condiciones más equitativas de explotación de la fuerza de trabajo mundial y de apropiación de la riqueza global. Por ello, alertamos sobre el resurgimiento de la ilusión de un capitalismo humanizable y al servicio de los pueblos, producto de un cambio en las relaciones de poder entre las naciones capitalistas.

Mientras el progresismo distrae a los pueblos con estos juego geopolíticos y la esperanza de un orden capitalista más democrático y humano, la cruda realidad es que el capital mundial acelera su cruzada internacional contra los derechos de la clase trabajadora.

Los estados capitalistas en general, aplican medidas para proteger a los monopolios, trasladando los efectos de la crisis, las guerras y la competencia comercial, sobre las espaldas de los



trabajadores y, en general, de los pueblos. Se aplican así reformas laborales que destruyen derechos históricos conquistados por los trabajadores, se incrementan las edades de jubilación, se congelan los salarios frente al auge de la inflación, se avanza en políticas de flexibilización y desregulación laboral, se privatizan servicios básicos, y se aprueban impuestos regresivos. En fin, se imponen en todos los países capitalistas medidas anti-populares dirigidas a aumentar la competitividad de los monopolios a costa del sacrificio del conjunto de la clase trabajadora mundial.

En cada país, los Partidos Comunistas y el movimiento obrero clasista, participan y lideran importantes procesos de lucha y resistencia contra la aplicación de estas políticas regresivas. Sin embargo, la ausencia de una efectiva articulación internacional de las luchas de la clase trabajadora, y de ejercicio consecuente del internacionalismo proletario, debilita la capacidad de nuestro movimiento para vencer la estrategia mundial del capital.

La ausencia de una estrategia común y la fragmentación de las luchas obreras a nivel internacional, no es el único problema que enfrenta la unidad de nuestro movimiento. También el impacto que tiene el progresismo con su manipulación discursiva de la táctica de unidad contra un enemigo principal, que presentan vaciado de su carácter de clase, con la clara intención de congelar la lucha de clases al interior de cada país, y neutralizar la solidaridad internacionalista con el movimiento obrero que combaten las políticas antipopulares aplicadas por estos gobiernos reformistas.

Estas manipulaciones ideológicas del progresismo, tiende a llegar al extremo de calificar estas luchas legítimas del movimiento obrero por sus derechos, como acciones instrumentales a los planes de dominación del imperialismo. Es decir, no solo levantan barreras a la solidaridad proletaria, también justifican la política de criminalización y represión de las luchas obreras en esos países.

Esta es la compleja realidad en la que lucha la clase obrera a nivel global, y que sin duda potencia la capacidad de la burguesía mundial para avanzar con éxito sobre sus derechos.

En estos momentos de agudización de la crisis y de fuerte arremetida contra los derechos de los trabajadores, las vanguardias políticas de la clase obrera deben proponerse avanzar con una estrategia común, que sea expresión auténtica de sus intereses y objetivos históricos. Los cambios que sirven a los intereses de la clase trabajadora, sólo podrán venir de sus propias luchas contra la burguesía mundial, y no como resultados de reacomodos de fuerzas entre las potencias capitalistas.

La situación en Latinoamérica y el caribe.

En el continente latinoamericano y caribeño se reflejan los cambios en las relaciones de poder que sacuden el mundo. Estados Unidos ha perdido parte considerable de su hegemonía económica, aunque conserva su amenazante presencia militar y sostiene su política injerencista.

La vieja política de la zanahoria y el garrote sigue siendo su medio para imponer sus pretensiones hegemónicas. Utilizan sanciones ilegales criminales, como las que aplica contra los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela; despliega secreta y abiertamente apoyos a planes desestabilizadores contra gobiernos que no favorecen los intereses de sus monopolios, y refuerza su presencia militar en la región en alianzas con gobiernos afines. Pero también aplica vías diplomáticas de acuerdo para frenar cualquier proceso de cambios en favor de los intereses de los pueblos por parte de los gobiernos del progresismo.

En estos momentos, la región vive una nueva oleada de gobiernos denominados progresistas. Ciertamente estas victorias electorales están relacionadas con un despertar de luchas populares en la región, sin embargo el carácter de amplia alianza política-electoral, que incluye a sectores abiertamente de derecha liberal y socialdemócrata, imprimen a estos gobiernos un perfil más claramente conservador.



Luego de 20 años, el progresismo latinoamericano no puede disimular más sus límites de clase, han demostrado su incapacidad para ejecutar las transformaciones de fondo que demanda la clase trabajadora en el continente. En algunos países, pasaron de ser la expresión de las reformas sociales para personificar la aplicación de agresivos ajustes antipopulares que desmontan derechos conquistados.

Pese a esta sinceración programática en varios gobiernos progresistas, las fuerzas políticas que los sustentan mantienen la narrativa de una falsa oposición antagónica entre estos gobiernos y los de la derecha tradicional. Se plantea la lucha en términos de una falsa disyuntiva entre gobiernos neoliberales y progresistas, vendiendo la idea de un capitalismo bueno y otro malo.

Desde el PCV hemos expresado nuestra solidaridad con los procesos de cambios que en la región expresan anhelos de transformación que demandan los pueblos y de ruptura con el hegemonismo estadounidense; dejando también clara nuestra opinión sobre los límites de estos procesos de alianzas policlasistas, y la necesidad de fortalecer la acción política independiente de los partidos comunistas y el movimiento obrero como única garantía para avanzar en conquistas duraderas.

En algunos países de la región, la alternancia en el gobierno entre las fuerzas del progresismo y los partidos tradicionales de la derecha, con sus gestiones antipopulares e incapacidad para cumplir sus promesas de reformas sociales, han generando un grado tal de desesperanza, frustración y desmovilización política en las masas populares, que han favorecido el crecimiento de fuerzas políticas de carácter ultra liberales y nacionalistas.

¿Qué pasa en Venezuela?

El proceso Venezolano es un ejemplo de los límites del progresismo y el carácter reformista de las fuerzas policlasistas. La crisis del capitalismo dependiente y rentista, agudizado por las criminales sanciones, crearon las condiciones para que el gobierno encabezado por el presidente Nicolas Maduro Moros- en representación de la fracción burguesa y mafiosa que controla el aparato Estatal y gobierno- aplique el ajuste antipopular más agresivo en la historia del país.

El giro neoliberal de la política económica gubernamental, aunado al complejo escenario de la crisis energética provocado por la guerra en Ucrania, abrieron las posibilidades para la coincidencia de intereses y posterior negociación entre el imperialismo, la burguesía y clase terrateniente tradicional, con la nueva fracción burguesa (autodenominada "burguesía revolucionaria) que dirige el gobierno en Venezuela.

Como le informamos en el 22 EIPCO de La Habana, el país avanza hacia un proceso de flexibilización y levantamiento progresivo de las sanciones sobre la base de un pacto de élites y la implementación de un ajuste económico antipopular que ofrece plenas garantías al capital privado nacional y extranjero.

Desde el PCV hemos sido firmes en nuestra condena de las sanciones y la injerencia imperialista. Tanto ayer como hoy, exigimos su levantamiento inmediato sin ningún tipo de condicionamientos. Así mismo, hemos rechazado toda negociación que implique entrega de soberanía y la destrucción de derechos del pueblo trabajador. Condenamos la impunidad que disfrutaron tanto quienes promovieron esta política criminal, como aquellos empresarios y políticos que sacaron provecho de estas circunstancias para acumular riquezas, mientras el pueblo venezolano padece las peores penurias.

El paquetazo antiobrero y antipopular

Es el pueblo trabajador quien en definitiva paga las consecuencias de la crisis y las sanciones imperialistas; no la burguesía, ni la élite gobernante. El gobierno del Psuv, a través de una política antiobrero y antipopular, se ha encargado de reducir los efectos de las mismas sobre el empresariado, trasladando toda la carga sobre el pueblo trabajador.



El corazón del ajuste económico o el “Plan antibloqueo”-como eufemísticamente le llaman-ha sido la destrucción de los derechos de la clase trabajadora. Desde el último incremento salarial ocurrido hace 18 meses, el poder adquisitivo del salario real se ha destruido en un 90%. El salario mínimo legal y las pensiones, apenas llegan a 3 dólares al mes, debido a la criminal política de congelamiento de los salarios en moneda local, la dolarización de los precios y una inflación interanual que rebasa los 400 %.

En su absoluta subordinación a los intereses del empresariado, el gobierno de Nicolas Maduro ha profundizado la política de bonificación del ingreso de los trabajadores como medida compensatoria. Con esta política de sustituir los salarios por bonificaciones, el gobierno redujo abismalmente los costos laborales, ampliando los márgenes de utilidad de las empresas capitalistas. La política salarial antiobrera, también incide en el avance de la desregulación del mercado laboral, favoreciendo las condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Los resultados son jornadas laborales que rebasan las 8 horas diarias, pagos insuficientes de las horas extras de trabajo, empleos sin contratos y muchos más abusos patronales.

Pero el salario no fue el único derecho sacrificado, a través del memorando ministerial 2792 fueron suspendidas las convenciones colectivas de los trabajadores de todas las ramas. Seguidamente, mediante instructivo emitido por la oficina pública de presupuesto (ONAPRE) redujeron unilateral y arbitrariamente el sistema de remuneraciones de los trabajadores de la administración pública aplicando recortes de los salarios a la mitad, y finalmente eliminaron de facto el derecho a las prestaciones sociales, utilidades y ahorros de los trabajadores. Todo esto, junto a la precariedad de los servicios públicos y el desmantelamiento de conquistas esenciales como la salud y educación pública, configuran un cuadro de sobreexplotación salvaje y deterioro alarmante de las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

A este sacrificio criminal de los derechos de la clase obrera en función de la ganancia de los capitalistas, el progresismo le llama “resistencia antiimperialista”.

El gobierno elude toda responsabilidad trasladando la culpa de todo a las sanciones imperialistas. Si bien las sanciones han tenido un impacto devastador en el conjunto de la economía, no es menos cierto, que en este periodo, el gobierno ha destinado cuantiosos recursos públicos para subsidiar al sector privado, y otra parte se continuó despilfarrando por los manejos corruptos. Cerca de 10 mil millones de dólares en subsidio estatal se transfirieron al sector privado, por la vía de la intermediación cambiaria; unos 20 mil millones de dólares desaparecieron de la industria petrolera nacional en medio de uno de los escándalos de corrupción más vergonzoso del gobierno de Nicolas Maduro, y el enriquecimiento acelerado de altos funcionarios civiles, militares, empresarios y terratenientes, que salta a la vista. La enorme brecha de desigualdad social que vive el país, es la mayor evidencia de un gobierno que gestiona la crisis en beneficios de los más poderosos.

La represión Estatal de las luchas obreras

El giro neoliberal ha generado un despertar de las luchas del movimiento obrero y sindical venezolano. Se registran un promedio de 17 protestas diarias en el país por reclamos salariales y laborales. Las exigencias principales de los trabajadores son el reconocimiento del derecho a un salario y pensiones igual a la canasta básica, el restablecimiento de las convenciones colectivas y el cese de la criminalización de las luchas obreras.

La respuesta del gobierno y el aparato estatal ha sido la persecución, represión, y judicialización de las luchas de los trabajadores. Se registran más de 100 casos de trabajadores judicializados y muchos de ellos permanecen injustamente detenidos. Recientemente, fueron secuestrados y encarcelados dos dirigentes sindicales de las empresas básicas de Guayana mientras realizaban protestas reivindicativas. Para justificar la ilegal acción, los tribunales emitieron un amparo constitucional en favor de la empresa que prohibía el ejercicio del derecho a huelga y cualquier tipo de protesta sindical.



Las mismas prácticas represivas e intimidatorias las aplican contra los trabajadores de la educación. Frente a la posibilidad de la convocatoria a una huelga en el sector, la Ministra de Educación del gobierno, ha amenazado a los maestros con despidos masivos y su sustitución por trabajadores desempleados o retirados. Se trata de un estado capitalista utilizando el chantaje de la población obrera desocupada para romper la solidaridad de clase y presionar la baja de los salarios.

Como se puede evidenciar, la confrontación con el imperialismo no anula la lucha de clases al interior del país.

Hoy el gobierno habla abiertamente de alianza estratégica con las federaciones empresariales y del papel del Estado como simple agente regulador al servicio de los intereses de los capitalistas. Esta euforia liberal está dando rienda suelta a la acción depredadora de los terratenientes, el capital agrario y minero sobre las reservas naturales del país. La crisis ecológica del arco minero de Guayana es uno de los ejemplos más dramáticos. Esta misma acción avanza contra los derechos de los pueblos originarios: expulsándolos de sus tierras, destruyendo su hábitat y reprimiendo sus luchas de resistencia.

Por si fuera poco, el giro reaccionario del gobierno del PSUV también se está expresando en su alianzas con el extremismo religioso. El presupuesto público del año 2023 destina más recursos a la promoción de estos cultos, que al desarrollo científico.

La judicialización del PCV

La arremetida contra la clase obrera ha significado también la imposición de restricciones a las libertades sindicales y al ejercicio de su derecho democrático a organizarse en partidos políticos legales.

La intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela, consumada el pasado 10 de agosto a través de la ilegal sentencia N° 1160, se corresponde con este objetivo de desarmar a la clase trabajadora de instrumentos de lucha en medio de la brutal ofensiva contra sus derechos.

Sobre el asalto judicial contra nuestro partido, es importante que los partidos comunistas y obreros del mundo conozcan las siguientes aberraciones legales que rodean la sentencia:

1. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emite la sentencia N° 1160 en respuesta a un recurso introducido por un grupo de personas no militantes del PCV, es decir, admitió una demanda presentada por personas que no reunían la cualidad jurídica para actuar en nombre del PCV, y por tanto, viola la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales; 2. El recurso introducido por estos mercenarios no contenía pruebas que corroborase su militancia en el PCV, y que demostrara la veracidad de las denuncias formuladas en el escrito, lo que quiere decir, que el TSJ adoptó una decisión sin verificar los hechos. 3. A su vez, la Sala Constitucional negó el derecho constitucional a la defensa del Partido Comunista de Venezuela, ignorando el escrito de defensa y pruebas introducidas por el PCV, violando de manera flagrante el estado de derecho y el debido proceso; 4. El TSJ designó una Junta Ad Hoc integrada por siete (7) personas no militantes del PCV para asaltar la personalidad jurídica del partido, desconociendo ilegalmente el Comité Central electo por el XVI Congreso del PCV. 5. Esta junta Ad Hoc integrada de la siguiente forma: tres (3) militantes del PSUV, un (1) es militante del partido Somos Venezuela, un (1) ex-candidato del partido UPP89, y dos (2) ex-militantes del PCV, se le confiere el poder de asumir los derechos legales del PCV y reorganizar todas sus estructura a nivel nacional.

Como se puede ver, la sentencia 1.160 es una completa aberración jurídica sin sustento en las leyes venezolanas. Estamos frente a un ejercicio autoritario del poder estatal para implementar la decisión política de la cúpula del gobierno de intentar destruir al Partido Comunista de Venezuela.

La usurpación de la personalidad legal del Partido, permite que estos mercenarios puedan recurrir a la fuerza estatal para despojar a la verdadera dirección del PCV y su militancia, de las sedes y activos del partido. Ya desde la emisión de la sentencia, estos mercenarios- con el apoyo de la



cúpula del PSUV- han procedido a formar nuevas estructuras de dirección regional con la presencia de dirigentes medios del PSUV, comunidades evangélicas y militantes de otras organizaciones subordinadas al gobierno, dejando en evidencia que ningún militante del PCV participa de su farsa, y que estamos frente a un vil y vergonzoso asalto dirigido desde el gobierno.

La judicialización del PCV tiene una finalidad clara: destruir la resistencia clasista de los trabajadores al ajuste anti-popular, debilitar las luchas por salarios y reivindicaciones laborales, e impedir el fortalecimiento de una alternativa revolucionaria a los dos bloques de la burguesía responsable del desastre nacional: la que ejerce el gobierno y la que conforman las diversas oposiciones de derecha tradicional.

Al asaltar al PCV, la clase trabajadora perdió el último partido con estatus legal que le quedaba, esto significa que también le robaron su derecho de participar con candidaturas propias, que representen sus verdaderos intereses, en las elecciones presidenciales del 2.024 y las parlamentarias del 2.025. El pacto de élites ha cumplido así el objetivo de secuestrar los futuros procesos electorales para la participación exclusiva de los partidos de la burguesía.

La forma como fue ejecutado el asalto de nuestro partido, ha dejado en evidencia el nivel de descomposición moral del PSUV en su desespero por contener las luchas populares y presentarse como una fuerza fiable para los intereses de los empresarios y los monopolios imperialistas.

Queremos agradecer a los Partidos Comunistas y Obreros sus muestras de solidaridad, y les invitamos a sostener una campaña internacional para exigir que sea revocada la ilegal sentencia N° 1160 y para que se restituyan los derechos legales y democráticos a la auténtica militancia del Partido Comunista de Venezuela.

Independientemente de la divergencia que tengamos en la caracterización del gobierno de Venezuela y su partido, atentar contra el derecho a existir de un Partido Comunista debe generar una respuesta contundente y sin vacilaciones desde el Movimiento Comunista Internacional. El Plan de Acción que hemos aprobado en el 22 EIPCO de la Habana, nos convoca a **“expresar solidaridad con los comunistas que se enfrentan a la persecución y a las prohibiciones del libre ejercicio de sus derechos políticos y sociales”**, pero también a **“realizar campañas internacionales en solidaridad y apoyo a la lucha de la clase obrera... en su justo reclamo por el derecho a la sindicalización, mejor salario, las condiciones laborales y sus derechos democráticos.”**

Les aseguramos que los planes de la burguesía y sus partidos, para destruir al PCV, no pasarán. Fracasaran como los otros tres intentos anteriores en nuestra historia, por la sencilla razón de que nuestra política es genuina expresión de los intereses de una clase obrera que lucha por recuperar sus derechos.

Esperamos que nuestra experiencia sirva de lección y enseñanzas a los Partidos Comunistas y Obreros del mundo. Como bien decía Lenin, “Salvo el poder, todo es ilusión”.

Grandes desafíos tenemos los Partidos Comunistas y Obreros en estos momentos decisivos de la lucha de clase a nivel mundial. Sobre nuestra posición y papel, solo queremos recordar una cita de Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista:

“Los comunistas se distinguen únicamente de los restantes partidos proletarios porque, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios destacan y hacen valer los intereses comunes de todo el proletariado, independientemente de su nacionalidad; por otra, por el hecho de que, en las diversas fases de desarrollo que recorre la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre el interés del movimiento general.”

¡Viva el internacionalismo proletario!